



Comunidades acusan presiones y apuro

Pacto Codelco-SQM: crecen tiranteces por consulta indígena

El cronograma de Codelco para cerrar el acuerdo con SQM

Máximo Pacheco, presidente de Codelco, busca cerrar en septiembre el acuerdo con SQM para explotar el Salar de Atacama. Para ello, además de la consulta indígena, aún deben despejarse dos hitos más. Primero, está el SARM, la última autoridad antimonopolios internacional que falta por aprobar la asociación. La semana pasada, según fuentes cercanas a la negociación, llegaron nuevas preguntas a Codelco desde la autoridad china, a la que le preocupa por el rol estratégico del litio y la competitividad de la estatal. China es el principal comprador del litio que produce SQM. Fuentes de la estatal dicen que el SARM informó a Codelco que "algunos competidores" han expresado preocupación por el acuerdo, lo que refleja el riesgo de que Tianqi -productora china de litio, accionista de SQM y opositora al acuerdo- presione para que el regulador no lo apruebe o lo haga con exigencias difíciles de cumplir.

El segundo hito es la cuota que debe otorgar la CCHEN: 330 mil toneladas de litio entre 2031 y 2060, lo que podría resolverse en los próximos días, dicen las fuentes. Finalmente, está la consulta indígena. Son 13 temas a tratar en la fase actual, la de Diálogo -es la cuarta de cinco etapas-; algunos grupos van en el tema 6 y otros en el 4, dicen las fuentes de Codelco, que espera tenerlos zanjados al 19 de junio.



Máximo Pacheco, presidente Codelco.

Corfo realiza tres procesos distintos de consulta y el alcalde de San Pedro de Atacama pide escuchar a todas las comunidades por igual.

Sergio Sáez Fuentes

Las comunidades Lickanantay de San Pedro de Atacama acusan que el proceso de consulta indígena del acuerdo Codelco-SQM, impulsado por Corfo, carece de legitimidad, transparencia y participación efectiva. Una muestra de que la desconfianza ha escalado al punto que voces del territorio advierten que el futuro del Salar de Atacama —y con ello, del litio chileno— está en riesgo.

“La etapa actual de la Consulta Indígena sobre los contratos del Salar de Atacama está en un punto crítico”, advierte un boletín publicado por el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) el 17 de junio. Y acusan al Estado de “tratar la consulta como un trámite”, actuando “bajo la presión de cerrar un negocio que favorece principalmente los intereses del Estado y de las empresas asociadas, como Codelco y SQM”.

La consulta se realiza a tres bandas —comunidades del borde sur, comunidades de San Pedro y asociaciones indígenas—, una metodología impuesta por Corfo pese a las objeciones registradas en acta durante la etapa de planificación, generando divisiones internas, dicen en la zona.

El alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, plantea que “el proceso vive momentos complejos, y parte de esa complejidad surge desde el propio territorio. El que existan 3 metodologías distintas muestra que no hubo consenso entre los distintos actores locales sobre cómo abordar este diálogo”, señala. “Este proceso debe cerrarse dentro del actual gobierno, lo que genera presión adicional”, añade.

Las comunidades de los ayllus tradicionales —Coyo, Solor, Quitor, Séquitor,

Larache, entre otros— cuestionan directamente a Corfo. “Ese malestar debe ser escuchado y abordado con voluntad de diálogo”, remarca Zuleta. Aunque valora la instalación de una oficina local de Corfo, advierte que “ahora se requiere dar un paso más: asegurar que todas las voces sean consideradas por igual”, insiste.

Tapia (PPD): “Hay ciertas presiones para aprobar la consulta”

La fractura se ha profundizado con la presión por cerrar rápido el proceso. “Hay ciertas presiones para aprobar la consulta”, denuncia el diputado Cristian Tapia (PPD), presidente de la comisión investigadora sobre el acuerdo. “Las comunidades están bien desilusionadas. Bien descontentas. Decían que llegaban a última hora con las consultas, que no eran tomados en cuenta, que aparecieron con donaciones. Sienten que el proceso no fue transparente”, afirma.

La tensión también se siente en la Cámara de Diputados. Este lunes se votará en Sala la creación de una comisión investigadora

por Codelco y SQM, lo que amenaza con escalar aún más el conflicto institucional en torno al proyecto.

La comunidad de Coyo, a través de su abogado Gabriel Muñoz, que judicializó el acuerdo, explica las razones del descontento: “Interpusimos un recurso de protección por tres razones: no existe sustento normativo para este acuerdo; se omitió una licitación pública, entregando una prórroga directa de 30 años a SQM; y no se hizo consulta indígena previa. Esos cuestionamientos se ven hoy reforzados por las presiones institucionales”, dice Muñoz.

Una fuente que conoce las tratativas, y que habló en condición de anonimato, va más allá: “Este proceso partió mal y ha demostrado con el paso del tiempo la incapacidad por parte de Corfo de llevar adelante esta instancia de manera transparente. Se restringió el acceso a los textos del contrato, las reuniones han tenido poco avance y ha primado la urgencia por sobre la importancia”. Agrega que la separación artificial de las comunidades generó desconfianza, y la urgencia por terminar pronto el proceso le está restando legitimidad al diálogo.

CPA: “No se puede seguir avanzando si no se garantiza una participación real”

El boletín del CPA, por su parte, llama a resistir: “No se puede seguir avanzando si no se garantiza una participación real, donde las voces indígenas no solo sean oídas, sino también consideradas en la toma de decisiones”. Agrega que la consulta no puede convertirse en una formalidad vacía. “Es el momento de alzar la voz y exigir lo que por derecho nos corresponde”.

La consulta, que debería ser un derecho fundamental de los pueblos originarios, ha terminado siendo percibida como



Es cierto que el proceso vive momentos complejos, y parte de esa complejidad surge desde el propio territorio”, **Justo Zuleta**, alcalde de San Pedro de Atacama

una imposición apurada. En palabras del Consejo de Pueblos Atacameños: “El futuro de nuestro territorio y la dignidad de nuestro pueblo dependen de que se respete este derecho”.

Mientras la tensión sigue creciendo en la región, la semana pasada se dio a conocer en la Región Metropolitana, un sondeo de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), que establecía que un 61% de los encuestados cree que la firma del acuerdo sería “beneficiosa para el país”.